JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil veintitrés.

Acción de Tutela No. 11001 31 03 025 2023 00442 00.

Resuelve el Juzgado la acción de tutela formulada por LUIS ANTONIO SALAMANCA QUIJANO, a través de apoderado judicial, contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA; trámite dentro del cual, se vinculó al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL y a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.

1. ANTECEDENTES

1.1. El señor Salamanca Quijano promovió acción de tutela implorando la protección constitucional de los derechos fundamentales a la salud y vida, y, en consecuencia, solicitó que, se ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, la entrega de los medicamentos ordenados por el galeno tratante (relacionados en su pretensión), se cubra el 100% de los mismos y se conceda su tratamiento integral.

1.2. Como hechos relevantes manifestó, en síntesis, que es adulto mayor de 76 años, y presenta diagnósticos de “1. *EMFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL CON TRASPLANTE RENAL DONANTE VIVO desde marzo de 1998.* 2. *ADENOCARCINOMA DE PROSTATA AVANZADO DIAGNOSTICADO EN 2016.* 3. *TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEBRO INFERIOR IZQUIERDO.* 4. *HIPOTIROIDISMO* 5. *HIPOACUSIA MIXTA BILATERAL.* 6. *HIPERTENSION ARTERIAL Y OTROS*”; razón por la cual, los médicos tratantes adscritos a la entidad accionada le prescribieron los fármacos denominados: “1. *EVEROLIMUS 1MG 60 tabletas.* 2. *MICOFENOLATO 360 MG MIFORTIC DE NOVARTIS 90 CAPSULAS.* 3. *TAMSOLUSINA 0.4 MG 30 CAPSULAS.* 4. *Análogo – LH- RH TRIPTORELINA de 11.25 MG 1 AMPOLLA cada 3 meses.* 5. *Bloqueador SOLAR SPF 50 dos tubos para el mes*”, para ser entregados de forma continua y periódica.

No obstante, los insumos “*EVEROLIMUS*” y “*MICOFENOLATO*” no le están siendo suministrados, pues la convocada aduce no tener existencias; además, los tres medicamentos restantes se entregan de manera tardía, lo que genera consecuencias en su estado de salud. Y, aunque el bloqueador solar ya había sido ordenado en otro fallo de tutela, presenta demora en su dispensación.

1.3. Admitida la tutela, se dispuso oficiar a la accionada y vinculadas para que rindieran un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela.

1.4. El HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, a través de su Director, informó que esa institución brinda atención a los pacientes en los servicios de urgencias, hospitalización, procedimientos médicos y quirúrgicos de alta complejidad, y no la dispensación de medicamentos. Por lo tanto, remitió por competencia la presente acción de tutela, a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, quien, de acuerdo con lo expuesto, es la dependencia encargada de la entrega de los medicamentos requeridos por el accionante, y en ese sentido, solicitó su desvinculación.

1.5. Por su parte, la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1., guardaron silencio en el término otorgado.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Sea lo primero señalar, que conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

2.2. En lo que respecta al derecho a la salud, conviene mencionar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 49 estableció que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Del mismo modo la Ley 1751 de 2015 refiere que la salud no solo es un servicio público, sino que además es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable. El derecho fundamental comprende el acceso efectivo a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. Así mismo, de acuerdo con esta disposición es un deber estatal asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

La Ley 1751 de 2015 establece que la prestación del servicio de salud se rige bajo el principio de integralidad (cfr. art. 8). Bajo su amparo, los servicios y tecnologías de salud son suministrados de manera completa, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud y sobre todo del cubrimiento o financiación definido por el legislador. Concordante con ello, el art. 10 ibídem estableció como derecho de las personas el no ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser obligados a soportar

sufrimiento evitable, ni obligados a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento.

Asimismo, la Corte Constitucional, ha sostenido que *“...el derecho a la salud es un derecho fundamental y tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo.”*¹ Adicionalmente, *“el servicio de salud debe prestarse de manera oportuna, eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad. La prestación del servicio de salud en estos términos se ve limitada cuando se imponen barreras o trabas administrativas por parte de la entidad prestadora de salud, no imputables al paciente. Una de las consecuencias que ello genera es la prolongación del sufrimiento que consiste en la angustia emocional que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser atendidas y recibir tratamiento. Esta clase de conductas generan una grave afectación de los derechos fundamentales no solo a la salud, sino a la integridad personal y a la vida en condiciones dignas”*².

2.3. En el presente caso, con la historia clínica y demás documentos aportados al expediente, encuentra acreditado esta judicatura que el señor LUIS ANTONIO SALAMANCA QUIJANO ésta afiliado al sistema de salud con la entidad accionada, y presenta varios diagnósticos, denominados: *“EMFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL CON TRASPLANTE RENAL; ADENOCARCINOMA DE PROSTATA AVANZADO DIAGNOSTICADO; TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEBRO INFERIOR IZQUIERDO; HIPOTIROIDISMO; HIPOACUSIA MIXTA BILATERAL; HIPERTENSION ARTERIAL Y OTROS”*.

Por las patologías que presenta, le fueron ordenados los siguientes medicamentos:

1. EVEROLIMUS 1MG 60 tabletas, el 11 de septiembre de 2023.
2. MICOFENOLATO 360 MG MIFORTIC DE NOVARTIS 90 CAPSULAS, el 11 de septiembre de 2023.
3. TAMSOLUSINA 0.4 MG 30 CAPSULAS, el 29 de agosto de 2023.
4. Análogo – LH- RH TRIPTORELINA de 11.25 MG 1 AMPOLLA cada 3 meses, el 01 de julio de 2023
5. Bloqueador SOLAR SPF 50 Frasco, Cantidad 2, el 10 de agosto de 2023. (Cfr. órdenes médicas –archivos 03 y 04)

Sin embargo, asegura el accionante que, dichos insumos no han sido entregados, lo que repercute negativamente en su estado de salud; afirmación que no fue desvirtuada por la accionada Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Colombia y ni la vinculada Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, esta última, entidad responsable de la entrega de los medicamentos del actor, de acuerdo con

¹ Corte Constitucional, Sentencia T -737 de 17 de octubre de 2013. M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos.

² Corte Constitucional, T- 423/17, MP. IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO.

lo manifestado por el Hospital Central de esa institución; pues aunque fueron notificadas de la presente acción de tutela, no presentaron el informe solicitado, conducta que conlleva a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, teniendo presumiblemente ciertos los hechos que dieron origen a la queja constitucional, dado que tal presunción no ha sido desvirtuada por la dirección accionada y la dependencia vinculada.

Se debe precisar que en Sentencia T-057 de 2013 se señala los principios que deben regir la prestación del servicio de la salud, entre ellos: **oportunidad** y **continuidad**; el primero refiere que el servicio ser prestado prontamente, y el segundo, que el servicio debe ser eficiente una vez que se haya iniciado con su prestación. Es así que debe recordarse que el principio de continuidad está también relacionado con el principio de eficiencia, conforme al cual la prestación de los servicios de salud deberá ofrecerse de manera tal, que no ponga a los (a) beneficiarios (a) del servicio ante trámites burocráticos innecesarios o superfluos encaminados a obstruir.

En ese orden, teniendo en cuenta los múltiples diagnósticos que presenta el paciente, así como su avanzada edad (76 años), es claro que adquiere el estatus de persona de especial protección constitucional, por lo que, la entidad accionada y a la red de prestadores integrada, deben prestar oportuna y eficientemente los servicios de salud, entrega de medicamentos, autorización de los fármacos faltantes y práctica de procedimientos que requiera el paciente para el tratamiento de sus patologías, de tal manera que no se halle en la necesidad de interponer otra acción constitucional con tal fin. Por lo tanto, se accederá al amparo deprecado y se ordenará el suministro de los medicamentos reclamados.

Aunado a ello, cabe precisar que aun cuando en fallo de tutela de fecha 01 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal, ordenó, a favor del actor y a cargo de la accionada, el suministro del bloqueador "*HETIL HEXIL METOXINAMATO + OXIBENZONA + OCTOCRYLENE + AXIPIENTES*", no se observa que sea el mismo protector solar que se pretende con esta acción y que se denominó "*Bloqueador SOLAR SPF 50 Frasco, Cantidad 2*", por lo que al ser este último el insumo prescrito por el galeno tratante, también se ordenará su entrega.

En consecuencia, sin mayores consideraciones ulteriores, encuentra este juzgado que se vulneró y se siguen conculcando los derechos fundamentales del accionante, por cuanto no se acreditó que se le haya efectuado la entrega de

los medicamentos prescritos como parte del tratamiento para las patologías que padece.

En lo que tiene que ver con el tratamiento integral solicitado por el accionante, debe decir este juzgador que no se observa orden del médico tratante que prescriba algún procedimiento o tratamiento médico adicional que requiera, y que este haya sido negado; tampoco se advierte que la prestación del servicio de salud, en lo que respecta a consultas médicas, atención y demás asistencias requeridas con ocasión a sus patologías, se vea restringido o entorpecido. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado “... *en cuanto a la solicitud de servicio integral de salud, este tribunal considera que no resulta procedente proferir una orden indeterminada respecto de los servicios de salud que no han sido prescritos por un profesional de la salud y que, en consecuencia, no han sido negados por la E.P.S.*”³, razón por la cual no es procedente acceder a su petición de ordenar la atención integral, toda vez que se trata de proferir una orden indeterminada y futura, sin comprobar una prescripción expresa del médico tratante adscrito a la EPS.

3. CONCLUSIÓN

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, se concederá el amparo impetrado, ordenando a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1., que autoricen y entreguen, a favor del accionante, los medicamentos reclamados con la presente acción de tutela; y se negará el tratamiento integral solicitado.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

4.1. CONCEDER el amparo de las garantías fundamentales invocadas por LUIS ANTONIO SALAMANCA QUIJANO, conforme lo expuesto en esta providencia.

En consecuencia, se dispone:

³ Sentencia T-769/13

4.1.1. ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, que, a través de su representante legal, Director o quien haga sus veces, en el término de cinco (5) días, siguientes a la notificación de este fallo, desde el ámbito de sus competencias coordinen, autoricen y entreguen a favor del accionante los medicamentos denominados: 1. *EVEROLIMUS 1MG 60 tabletas*. 2. *MICOFENOLATO 360 MG MIFORTIC DE NOVARTIS 90 CAPSULAS*. 3. *TAMSOLUSINA 0.4 MG 30 CAPSULAS*. 4. *Análogo – LH- RH TRIPTORELINA de 11.25 MG 1 AMPOLLA cada 3 meses*. 5. *Bloqueador SOLAR SPF 50 frasco, Cantidad 2"*, de conformidad con las prescripciones médicas emitidas el 10, 29 de agosto y 11 de septiembre de 2023 (órdenes médicas –archivos 03 y 04)

4.2. Negar la concesión del tratamiento integral, conforme lo indicado en la parte considerativa de esta decisión.

4.3. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.4. Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

Notifíquese y Cúmplase.
El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez

**Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d305db324f6c0e1125d3ef4bfa6e1c14fef627d96011d63ffd75f5a7e6481717**

Documento generado en 02/10/2023 07:49:54 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**